



Corrientes, 13 de Noviembre de 2020.-

**A V.E.**

**Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia**

**Provincia de Corrientes**

**Dr. LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ**

**S \_\_\_\_ / \_\_\_\_ D**

De mi mayor consideración:

En mi carácter de presidente del Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial, tengo el honor de dirigirme a V.E. y por su intermedio al Alto Cuerpo que tan dignamente preside, a fin de reiterar pedido formulado en fecha 13 de marzo del corriente y ante la situación epidemiológica generada por el brote del coronavirus (COVID-19) declarado en fecha 11 de marzo de 2020 como PANDEMIA por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

En efecto, en atención al aumento de casos positivos sobre todo en la ciudad de Corrientes y Bella Vista, y teniendo en cuenta que el gobierno nacional para hacer frente a la situación sanitaria actual pasó del ASPO (AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO OBLIGATORIO) al DISPO (DISTANCIAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO) y atento a la ausencia de norma legal específica en virtud de la cual los abogados puedan solicitar licencia por enfermedad a los fines de justificar su incomparencia e inactividad laboral en todas las causas judiciales en las que el profesional interviene, y los efectos de garantizar la libertad de actuación y asegurar la dignidad de nuestros matriculados, solicitamos se contemple la situación de los colegas pertenecientes a grupos de riesgo y/o que se encuentren aislados preventivamente por autoridad sanitaria.

Concretamente se peticona que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes disponga que todos los órganos jurisdiccionales y dependencias de la corte provincial contemplen los requerimientos de los profesionales que planteen problemas relacionados con el COVID-19 para el normal desarrollo de su actividad.





Se disponga en estos casos, la interrupción de los plazos procesales en curso, cuando el/la peticionante sea letrado/a único/a y acredite mediante certificado o constancia emanada de establecimiento asistencial, estar comprendido en el grupo de riesgo, por el plazo que aconsejen las autoridades sanitarias y recomendadas en cada caso (profesionales mayores de 60 años, diabéticos tipo I y tipo II con comorbilidades documentadas de menos de 6 meses, con afecciones cardíacas crónicas, enfermos pulmonares crónicos, pacientes oncológicos, inmunodeficientes, embarazadas).

Dado que nuestro código de rito omite contemplar vicisitudes, como estas, que merecen recibir tratamiento, teniendo en consideración el rol esencial de auxiliares de justicia y fundamentalmente, por el hecho de ser personas, es necesario que el abogado cuente con un amparo que le permita excusarse de la atención de sus obligaciones profesionales, resultando propicio que los plazos procesales se interrumpan, en pos de evitar que el atravesar por estos acontecimientos, deriven en una situación injusta no sólo para el profesional que la padeciera, sino también para el justiciable a quien éste represente.

Sentado lo que antecede, no podemos dejar de mencionar lo dispuesto por el artículo 157 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, que refiere a la suspensión de plazos procesales por *"circunstancias de fuerza mayor o causas graves que hicieren imposible la realización de actos pendientes"*.

Dicha disposición legal establece el principio de discrecionalidad judicial para su sanción y con ello, debe entenderse que el órgano jurisdiccional toma la decisión inaudita parte. La citada normativa no conduce a la solución, puesto que al resultar amplia y sujeta al criterio del magistrado las causales de "fuerza mayor", la incertidumbre ante cada caso concreto se acrecienta, en lugar de disiparla.

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para saludarlo con atenta consideración y respeto.



Dra. LILIAN SAWOCZKA  
PRESIDENTE



13-11-20